

Auto interlocutorio	250
Radicado	05266-31-03-001-2019-00163-00
Procedimiento	Ejecutivo (Obligación de Suscribir Documento)
Demandante	Ángela María López Tobón
Demandada	Gabriela de Jesús Tobón Gómez
Asunto	No acepta recusación, ordena remitir expediente digital al tribunal

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE  
ENVIGADO

Primero de julio del año dos mil veintiuno

Se decide sobre la recusación formulada por el señor **Juan Camilo López Tobón** -opositor al secuestro del inmueble con matrícula 001-723012-, la cual funda en el numeral 8º del art. 141 del C.G. del P., afirmando, en síntesis, que en el proceso con radicado 05266-31-03001-2015-00344-00, el suscrito Juez ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigaran penalmente –quien fungió como testigo-, “*con el fin que se determinara una conducta punible o un posible delito*”.

I. CONSIDERACIONES:

1. La causal de recusación alegada, es del siguiente tenor:

“*Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal*”.

2. No acepto la recusación, pues los hechos alegados por el señor López Tobón no encajan en la causal invocada, como paso a explicarlo:

2.1 No se trató de una “denuncia” propiamente tal, sino simplemente de ordenar una compulsa de copias al funcionario que tiene el deber de investigar la existencia o no de una presunta conducta delictiva que, en mi sentir, se dio al interior de un proceso jurisdiccional.

2.1.1 La misma Ley –Código de Procedimiento Penal-, art. 67, hace tal diferencia. Después de hablar, en el inciso primero, del deber de “denuncia”, en el segundo, consagró: “El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación, si tuviere competencia para ello, en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

2.1.2. La Corte Constitucional, en la sentencia C-848 del 2014, hizo claridad en que la “denuncia” es sólo una forma de la llamada “noticia criminal”, lo que implica que no se puede confundir con otras formas en que la autoridad encargada de investigar los presuntos delitos, tiene conocimiento de ellos:

“La gestión estatal inicia con lo que se denomina la “la noticia criminal”. Aunque en abstracto esta noticia se puede obtener también por otros medios formales, como una petición especial del Procurador General de la Nación o el Defensor de Familia o Agente del Ministerio Público, u otro medio oficial como informes de la policía o de otra autoridad que haya tenido conocimiento de la presunta conducta delictiva, o incluso por medios informales como podrían ser notas de prensa o comunicaciones anónimas, el conducto regular es el acto de denuncia, mientras los demás mecanismos tienen más bien un carácter excepcional.”

No es casual que el mismo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) haya establecido el deber de denuncia, pues dentro del diseño del procedimiento penal, constituye la “puerta de entrada” al sistema de administración de justicia, y por esta vía, a la protección de los derechos que han sido violentados por la realización del delito”.

2.1.3 En ese mismo sentido, es decir haciendo diferencia entre la denuncia y la mera compulsión de copias, ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

2.1.3.1 “En efecto, la “causal de recusación” que invocó la entidad querellante fue puntualmente analizada por el juzgador de primer grado encartado, llegando a la conclusión que no había lugar a ello, toda vez que, se itera, *la «compulsación de copias y la denuncia penal son dos estadios diferentes, la primera va encaminada a que se «investigue y compruebe la comisión de un posible hecho punible», mientras que la segunda, está enfilada a que una vez presentada por la víctima «permiten el ejercicio del tercero denunciante para hacer efectivos los daños y perjuicios (...)*”<sup>1</sup>.

2.1.3.2 Más recientemente, expresó: “Es pertinente reseñar, la orden de expedir copias de algunas piezas procesales, dada por el Juzgado accionado con el propósito de que se investigara disciplinariamente a Lozano Guevara, *no constituye mérito suficiente para apartar al funcionario del conocimiento del aludido decurso.*

*Lo antelado, habida cuenta que tal postura tiene asidero en las potestades “de ordenación y correccionales” conferidas a los jueces en los cánones 42 a 44 del Código General del Proceso.*

*No refulge con claridad la manera en la cual se puede ver afectado el criterio e imparcialidad de la citada dependencia con la simple remisión*

---

<sup>1</sup> CSJ. Civil, STC2029 de 20 de febrero de 2014, exp. 2013-02248-01.

*de la actuación a fin de que el competente determine si con el proceder del señalado profesional del derecho se quebrantaron normas disciplinarias.*

*Nótese, esa conducta del juez difiere, drásticamente, de la interposición de una queja o denuncia, pues en estas últimas, la persona que las formula está endilgando directamente la comisión de una actuación reprochable, penal o disciplinariamente, mientras que la aludida autoridad judicial procuró que los facultados legalmente discernieran si el abogado Juan Carlos Lozano Guevara, acá promotor, incurrió en una actitud censurable jurídicamente.*

Este Colegiado, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, en numerosos pronunciamientos expresó respecto de la causal N° 8 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que la recusación no operaba por el hecho de ordenar la reproducción del expediente y enviar esas pruebas al encargado de adelantar la investigación penal, ya fuera de las partes, los intervinientes o sus abogados.

Ahora, si bien es cierto, con la entrada en vigor del Código General del Proceso, en el numeral 8 del canon 141, se incluyó en la aludida causal las quejas disciplinarias, no lo es menos, la conclusión al respecto no varía, pues independiente de la jurisdicción receptora de los duplicados, es importante entender que la disposición del funcionario en tal sentido, *no lo deja incurso en impedimento alguno para continuar con el trámite pertinente, por cuanto, no dimana un compromiso de su rectitud o de su independencia para conocer del asunto*<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Exp: 11001-02-03-000-2017-01576-00.

2.2. Si en gracia de discusión se aceptara que la compulsas de copias se equipara a una “denuncia”, cuestión que no se acepta, debe tenerse en cuenta que la decisión que tomé fue en ejercicio de una potestad jurisdiccional, regulada en los arts. 42<sup>3</sup> y 81<sup>4</sup> del C. G. del P., la que “*no está desligada de la responsabilidad que tiene el director del proceso de garantizar el normal desarrollo del mismo, el cumplimiento de los términos, la observancia de los derechos y los deberes de los sujetos procesales y de los terceros llamados a intervenir, y de colmar las expectativas que puso en él la sociedad al encargarlo de dirimir los conflictos generados en su interior. De allí la importancia de dotarlo de facultades que le permitan asegurar sin excesos el cumplimiento de la labor encomendada, prerrogativa que maneja discrecionalmente como director del proceso en caso de considerarlo necesaria y eficiente*” (Sala Disciplinaria, Consejo Superior de la Judicatura, providencia de agosto 14 de 1997).

Resultaría un contrasentido, que el legislador le imponga al Juez una serie de deberes en su función jurisdiccional y que, cuando los ejerza al interior de un proceso, tenga que apartarse del conocimiento del mismo o de otro posterior.

2.3. Una de las Salas de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, sobre este especial tópico, dejó sentado:

“Según la doctrina nacional<sup>5</sup>, la causal séptima y octava -por guardar similitud- del art. 141 del C.G.P., en cuanto la expresión “denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado”, debe ser entendida de la siguiente manera:

“Sin duda alguna, el ánimo prevenido que se crea contra una persona que denuncia penal o disciplinariamente a otra, o a su cónyuge, compañero permanente, padres o hijos, justifica

<sup>3</sup> Norma que regula los “deberes del Juez”.

<sup>4</sup> Disposición que establece la “responsabilidad patrimonial” de los apoderados judiciales, cuando actúen con “temeridad o mala fe”, debiéndose remitir copia “a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.

<sup>5</sup> LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso Parte General. Dupré Editores, Bogotá, 2016, pp. 276 y ss.

plenamente la existencia de esta causal, la cual sin embargo ha sido objeto de unas particulares precisiones al señalar la normar que únicamente puede proponerse la recusación cuando la denuncia se formuló antes de iniciarse el proceso civil o “después”, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigaciones Pone de presente la regulación que en cualquiera de las hipótesis previstas es menester que el denunciado se halle vinculado a la investigación, es decir que se haya formulado imputación y, en segundo término, que si la denuncia es posterior a la iniciación del proceso civil los hechos objeto de investigación penal no se originen en el proceso mismo, deben ser ajenos por entero a él, por cuanto si la denuncia penal tiene como causa algo ocurrido dentro del proceso no se ha erigido la circunstancia como causal generadora de la recusación con el fin de poner coto a la maniobra de denunciar al juez sobre la base de cualquier irregularidad observada dentro del mismo proceso para buscar su desvinculación”.

## II. DECISIÓN:

Por lo expuesto, se

## RESUELVE:

1. No aceptar la recusación formulada por el opositor Juan Camilo López Tobón.
2. Remítase en forma virtual el cuaderno de oposición a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, para que defina si existe o no la causal de recusación alegada.

NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLOREZ HINCAPIÉ  
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado  
No. 72, fijado hoy en la Secretaría del  
Juzgado a las 8 a.m.

Envigado, 2 de julio del 2021



Tatiana Corrales Ramírez  
Secretaria